

Editorial

Revista N° 152

Agosto-Septiembre 2018

Marchas y contramarchas en la búsqueda de lo sustentable

El ministro Iguacel se esfuerza para morigerar los aumentos de la tarifa eléctrica en todo el territorio nacional. La distribución del AMBA está bajo jurisdicción nacional, y los precios mayoristas de la energía eléctrica también lo están e impactan en todo el territorio.

Atento a ello informó que el gobierno tomó dos medidas centrales. Una en el ámbito local, que fue acordar con la Distribuidoras que éstas apliquen un aumento por el valor agregado de distribución de la mitad al previsto en la última revisión tarifaria.

La otra acción, de su plena incumbencia, fue reducir el precio que paga el Estado a través de Cammesa, por el gas para centrales de 5,2 u\$s /MMBTU a 4,2 U\$S /MMBTU, dado que no encuentra razón para pagar un valor mayor que el que indica el mercado.

Las dos medidas desandan lo realizado recientemente por el mismo gobierno en su anterior gestión ministerial. Una con la RTI-Revisión Tarifaria Integral y la otra con la fijación del valor del gas. La primera con una reducción del 50% , temporal por cierto, y la segunda una disminución del 20% en el valor del gas. Ambas de alto impacto y no menores. Cabe preguntarse entonces ¿ que ocurrió en tan poco tiempo para que fallen tanto las previsiones del valor de bienes esenciales como es el gas y la electricidad?. ¿Cual es el grado de planificación del Estado, y su previsión acerca de las variables que lo lleva a producir semejantes ajustes ? ¿Cómo reaccionan los actores económicos y sociales ante estas imprevistas medidas? Pregunta simple, pero seguramente de respuesta compleja. Porsupuesto que al gobierno le toca responderlas para encaminarse a su buen funcionamiento. Sin embargo

cabría anotar algunos aspectos. La transparencia y concurso de los diferentes actores permite darle consistencia tanto a las RTI así como al valor del gas. En este caso, su costo en boca de pozo ha sido hasta ahora un verdadero misterio; a pesar del control estatal de la empresa líder en Argentina y siendo el resto de las empresas concesionarias. También parece que estamos descubriendo el estrecho vínculo de la política energética con las políticas económica, financiera, cambiaria, monetaria y social en la República Argentina. Sabemos que su articulación es esencial para la buena gestión. Cabe preguntarse entonces sobre la oportunidad, necesidad y el modo de dolarizar la energía. El informe de la OTA que presentamos en esta edición señala que nuestro precio mayorista eléctrico es muy superior al de Europa y al de EEUU. Si así fuera no nos posiciona como productores eficientes y dificultaría un standard de vida deseable para los argentinos. Ello ya representa un verdadero desafío.

Carlos M. Espasande